

AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Panamá, veintiuno (21) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

Ingresa a conocimiento de este despacho el reclamo por incumplimiento del derecho de petición, promovido por el señor [REDACTED] en virtud de la solicitud presentada ante el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN.**

Señala el reclamante que presentó una solicitud ante dicha institución, a fin de conocer sobre el estatus del recurso de reconsideración presentado en contra de la Resolución No. 5072 de 16 de septiembre de 2019; indica el reclamante que a la fecha no le ha sido contestada su solicitud, pese a que fue oportunamente presentada ante el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN.**

Luego de revisar las constancias procesales, se observa que lo solicitado por el señor [REDACTED] no corresponde a un derecho de petición, ni acceso a la información; lo requerido constituye un proceso administrativo, el cual está regido por los extremos procesales de la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000, la cual regula el procedimiento administrativo en general; es decir, tal normativa rige todas las fases del proceso administrativo y sus términos, cuya observación e incumplimiento tiene remedios procesales distintos al pretendido, por lo cual no es esta la vía idónea para tal fin.

Guardando relación con lo anterior, la Corte Suprema de Justicia de Panamá, ha sido enfática en su pronunciamiento sobre la competencia que tienen las autoridades para conocer sobre determinadas causas; la misma ha señalado lo siguiente:

“La competencia, conviene señalar, hace relación con la facultad de un juzgado para conocer y decidir de determinados asuntos, o como indica el artículo 234 del Código Judicial “la competencia en lo judicial es la facultad de administrar justicia en determinadas causas”. El reputado procesalista español JAIME GUASP, expresa que “la competencia tiene, dentro del proceso, la misión específica de completar u ordenar las soluciones genéricas presentadas por las normas sobre la función jurisdiccional. Una vez que estas normas han dicho que la jurisdicción civil puede conocer de cierta pretensión, las reglas de competencia intervienen para fijar cuál de los órganos que componen aquella está facultado para actuar con preferencia a los demás. Este papel complementario e integrador del instituto de la competencia se expresa, acertadamente, al describirla como la medida de la jurisdicción”. (GUASP, Jaime. Derecho Procesal Civil. T.I, Madrid, 1968, 127). La ley, con anterioridad al caso, ha de contener los criterios de determinación de competencia cuya aplicación a cada supuesto litigioso permita determinar cuál es el Juzgado o Tribunal llamado a conocer del negocio. El ordenamiento procesal en su artículo 235 fija la competencia de los jueces y tribunales para conocer de determinados procesos por razón de territorio; por la naturaleza del asunto; por su cuantía o por la calidad de las partes; es decir, que los factores territorial, objetivo y subjetivo constituyen, en principio, los criterios que utiliza la ley para llegar a determinar específicamente el juez o tribunal que debe conocer y fallar un determinado asunto o proceso.

(Sentencia, Amparo de Garantías Constitucionales, Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, de 7 de Julio de 2004, Magistrado Ponente, Rogelio Fábrega Zarak)”

El pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia ha sido claro al señalar que a la hora de conocer y emitir una decisión sobre determinada causa, se debe tener como referencia la competencia que tiene dicha autoridad para ello; es decir, determinar cuál es el tribunal competente para decidir sobre un asunto, ya sea por razón de su territorio, por la naturaleza del asunto; por su cuantía o por la calidad de las partes.

Siguiendo el curso de lo dicho anteriormente, es importante mencionar que los tramites y solicitudes presentados ante una institución gubernamental, están regidos y deben cumplir con las

formalidades establecidas por la Ley No. 38 de 2000, la cual regula el procedimiento administrativo general, determina sus fases y términos; por lo que es deber de la parte interesada realizar todas las acciones e impulsos legales, a fin de dar solución a la solicitud presentada.

En atención a lo anterior y luego de revisar los documentos aportados por el reclamante, se advierte que, el escrito petitorio del reclamo por incumplimiento del derecho de petición, se enmarca dentro de las disposiciones reguladas por la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000; la cual establece el procedimiento y los términos para el trámite presentado en instituciones administrativas del Estado; por lo que el reclamo por incumplimiento deviene en inadmisibile y en ese sentido se procederá.

En virtud de lo anterior, el Suscrito Director General Encargado de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información,

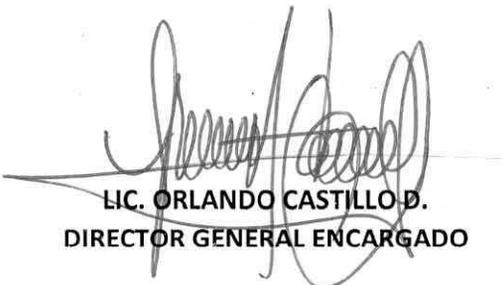
DISPONE:

- PRIMERO:** **RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENTE**, el reclamo por incumplimiento del derecho de petición presentado por el señor [REDACTED] en contra del **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**; toda vez que lo solicitado no constituye un derecho de petición, ni de acceso a la información; se trata de un proceso administrativo regulado por la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000, la cual establece el procedimiento, términos y formalidades para su respectivo trámite.
- SEGUNDO:** **NOTIFICAR** al señor [REDACTED], del contenido de la presente Resolución.
- TERCERO:** **ORDENAR** el cierre y archivo del presente reclamo.
- CUARTO:** **ADVERTIR**, que, contra la presente resolución, cabe Recurso de Reconsideración dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

FUNDAMENTO DE DERECHO:

Artículo 41 de la Constitución Política
Ley 38 de 31 de julio de 2000.

Notifíquese y cúmplase,


LIC. ORLANDO CASTILLO D.
DIRECTOR GENERAL ENCARGADO